



INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

INSTITUTO NACIONAL  
ELECTORAL

of. orig. EN 18 FOLIOS

2015 AGO 16 PM 8:23

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

Oficina de la Consejera Electoral  
Lic. A. Pamela San Martín Ríos y Valles

SECRETARÍA EJECUTIVA

Oficio No. CE/PSM/020/2015

Ciudad de México, 16 de agosto de 2015

LIC. EDMUNDO JACOBO MOLINA  
SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO GENERAL  
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL  
**P R E S E N T E**

Por este conducto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 41, párrafo segundo Base V, apartado A, párrafos segundo y tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 36, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, y 26, párrafo 6, del Reglamento de Sesiones del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, me permito enviarle el **voto particular** que formulo, consistente en:

**VOTO PARTICULAR QUE EMITE LA CONSEJERA ELECTORAL, LIC. A. PAMELA SAN MARTÍN RÍOS Y VALLES RESPECTO DE LA RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, RELATIVA AL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO IDENTIFICADO CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE UT/SCG/Q/SAQ/CG/90/PEF/105/2015 Y UT/SCG/Q/CG/111/PEF/126/2015 ACUMULADOS, CON MOTIVO DEL ESCRITO PRESENTADO POR SERGIO AGUAYO QUEZADA Y OTROS, ASÍ COMO POR EL ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL INE/CG301/2015, MEDIANTE EL CUAL SE INSTRUYÓ PARA CONOCER SOBRE LA SOLICITUD PRESENTADA POR DIVERSOS PARTIDOS POLÍTICOS, SOBRE LA PÉRDIDA Y/O CANCELACIÓN DEL REGISTRO, COMO PARTIDO POLÍTICO NACIONAL, DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO DERIVADO DE SUPUESTAS VIOLACIONES GRAVES, SISTEMÁTICAS Y REITERADAS EN LAS QUE HA INCURRIDO.**

Le agradeceré que realice las gestiones necesarias a fin que dicho documento sea incorporado a la resolución dictada.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

**ATENTAMENTE**

---

LIC. A. PAMELA SAN MARTÍN RÍOS Y VALLES  
CONSEJERA ELECTORAL



INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

VOTO PARTICULAR  
LIC. A. PAMELA SAN MARTÍN RÍOS Y VALLES

**VOTO PARTICULAR QUE EMITE LA CONSEJERA ELECTORAL, LIC. A. PAMELA SAN MARTÍN RÍOS Y VALLES RESPECTO DE LA RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, RELATIVA AL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO IDENTIFICADO CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE UT/SCG/Q/SAQ/CG/90/PEF/105/2015 Y UT/SCG/Q/CG/111/PEF/126/2015 ACUMULADOS, CON MOTIVO DEL ESCRITO PRESENTADO POR SERGIO AGUAYO QUEZADA Y OTROS, ASÍ COMO POR EL ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL INE/CG301/2015, MEDIANTE EL CUAL SE INSTRUYÓ PARA CONOCER SOBRE LA SOLICITUD PRESENTADA POR DIVERSOS PARTIDOS POLÍTICOS, SOBRE LA PÉRDIDA Y/O CANCELACIÓN DEL REGISTRO, COMO PARTIDO POLÍTICO NACIONAL, DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO DERIVADO DE SUPUESTAS VIOLACIONES GRAVES, SISTEMÁTICAS Y REITERADAS EN LAS QUE HA INCURRIDO.**

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 41, párrafo segundo, Base V, apartado A, párrafos segundo y tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (en adelante "Constitución"); 35, 36, párrafo primero y 39, párrafo 2 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (en adelante "LGIPE"), 13, párrafo 1, fracción b) del Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral y 26, párrafo 6, del Reglamento de Sesiones del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, presento **VOTO PARTICULAR**, respecto del punto 8 del orden del día de la Sesión Extraordinaria del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (en adelante "Instituto" o "INE") celebrada el pasado 12 de agosto de 2015, **relativo a la Resolución del Consejo General del Instituto respecto del procedimiento sancionador ordinario UT/SCG/Q/SAQ/CG/90/PEF/105/2015 y UT/SCG/Q/CG/111/PEF/126/2015 acumulados, iniciado con motivo del escrito presentado por Sergio Aguayo Quezada y otros, así como por el Acuerdo del Consejo General INE/CG301/2015, sobre la pérdida y/o cancelación del registro del Partido Verde Ecologista de México (en adelante "PVEM" o "Partido Verde"), derivado de supuestas violaciones graves, sistemáticas y reiteradas a la normatividad electoral.**



INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

VOTO PARTICULAR  
LIC. A. PAMELA SAN MARTÍN RÍOS Y VALLES

## ANTECEDENTES

1. El 29 de abril de 2015, se presentó en la Oficialía de Partes de la Presidencia del Consejo General, el escrito de petición suscrito por Sergio Aguayo Quezada por propio derecho y en representación de diversos ciudadanos que, entre otros, suscribieron la plataforma denominada "*change.org*", a fin de solicitar la pérdida y/o cancelación del registro, como partido político nacional, del PVEM.

En el escrito se solicitó a esta autoridad, entre otras cuestiones, iniciar el procedimiento para determinar la pérdida del registro del PVEM con base en: *i)* los hechos y consideraciones que se exponen en el propio escrito y; *ii)* lo que se determine en los procedimientos administrativos sancionadores que aún se encuentran pendientes de resolución, realizando para ello, una valoración de la gravedad y sistematicidad de las violaciones cometidas por dicho instituto político.

Lo anterior, bajo la consideración de que la equidad de la competencia electoral del proceso electoral que está en curso —cuyos ejes fundamentales son la preservación del modelo de comunicación política; no contar con recursos públicos o privados ilegales para el financiamiento de un partido; y no rebasar los topes de gastos de campaña— se ha visto vulnerada de manera grave, por demás sistemática e irreparable por el conjunto de violaciones cometidas por el PVEM en cada una de las fases del proceso electoral (previo al inicio de las precampañas, durante éstas, a lo largo de las intercampañas y, en el marco de las campañas), a través de la comisión de las siguientes conductas y prácticas ilegales:

- i)* Difusión sistemática, continua y reiterada de informes de labores de legisladores del PVEM que guardaban identidad con los contenidos de la propaganda de dicho instituto político difundida a través de distintos medios de comunicación social —tiempos del Estado en radio y televisión, *cineminutos*, revistas e internet—; espectaculares y demás propaganda fija y colocada en medios móviles; y utilitarios.



INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

VOTO PARTICULAR  
LIC. A. PAMELA SAN MARTÍN RÍOS Y VALLES

De lo anterior, se desprende la comisión de las siguientes infracciones en materia electoral: contratación y adquisición de tiempos en televisión, a través de cerca de 300 mil spots; violación al principio de imparcialidad que debe regir el uso de recursos públicos y; aportación de persona prohibida (Poder Legislativo y personas morales), cuyo monto debe documentarse a fin de identificar si corresponde a los precios del mercado.

- ii) Entrega de dádivas, consistentes en: lentes con graduación gratuitos; tarjeta de descuento *Premia Platino*; boletos de cine; papel grado alimenticio y; kit escolar.
- iii) Entrega de artículos promocionales utilitarios y propaganda electoral impresa elaborada con materiales prohibidos por la normatividad electoral: papel grado alimenticio para envolver tortillas; 4 millones de calendarios en material no biodegradable o reciclable distribuidos en los domicilios y; kit escolar, integrado por objetos que no son elaborados con materiales textiles, ni biodegradables o reciclables.
- iv) Incumplimiento o desacato de órdenes de la autoridad, derivado del incumplimiento de las medidas cautelares dictadas por la Comisión de Quejas y Denuncias del INE (en adelante "Comisión de Quejas" o "Comisión") y de sentencias emitidas por la Sala Regional Especializada, para la suspensión de la difusión de diversa propaganda cuyo contenido guardaba identidad con los informes de labores de los legisladores. Al respecto, se precisa que el PVEM implementó medidas fraudulentas para evadir los efectos de las determinaciones adoptadas por la Comisión, relativas a la sustitución de los promocionales cuya difusión se había ordenado suspender, por otros similares que transmitían el mismo mensaje.
- v) Uso indebido del padrón electoral y de datos personales.
- vi) Rebase de topes de gastos de campaña, que deberá ser analizado una vez que concluya el periodo de campañas.



INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

VOTO PARTICULAR  
LIC. A. PAMELA SAN MARTÍN RÍOS Y VALLES

Con base en lo anterior, se estableció que para efecto de atender la petición realizada, se debería determinar la afectación que la comisión de las infracciones señaladas ha representado para la autenticidad de las elecciones; el derecho al voto; el sistema de representación popular en la Cámara de Diputados e incluso el sistema de coaliciones a través de las cuales se puede acceder al control de la Cámara de Diputados por medios ilegales e ilegítimos, burlando la voluntad soberana del pueblo; y establecer si han existido organizaciones distintas a los partidos que han intervenido ilegalmente en los procesos electorales.

2. El 4 de mayo de 2015, se remitió el escrito referido anteriormente a la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral de la Secretaría Ejecutiva de este Instituto (en adelante "UTCE") a efecto de que fuese dicho órgano, quien instruyera y, en su oportunidad, elaborara el proyecto de resolución que debía ser sometido a consideración del Consejo General.

3. En la misma fecha, la UTCE radicó el escrito de petición recibido, al cual le correspondió el número de expediente UT/SCG/Q/SAQ/CG/90/PEF/105/2015; asimismo, se reservó lo conducente respecto a la admisión y emplazamiento hasta el momento procesal oportuno.

4. Mediante acuerdo de 11 de mayo de 2015, la UTCE determinó admitir a trámite el presente procedimiento ordinario sancionador y ordenó emplazar al PVEM.

5. El 19 de mayo de 2015, al no existir diligencias pendientes por practicar, se ordenó dar vista a las partes para que en vía de alegatos manifestaran lo que a su derecho conviniera.

6. El 22 de mayo de 2015, se recibió en la UTCE, el oficio INE/SCG/0935/2015, signado por el Secretario del Consejo General del INE, a través del cual remitió el *ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL [...] POR EL QUE SE ORDENA EL ANÁLISIS PARA EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE PÉRDIDA DE REGISTRO DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO POR EL PRESUNTO INCUMPLIMIENTO GRAVE Y SISTEMÁTICO DE LAS OBLIGACIONES QUE LE SEÑALA LA NORMATIVIDAD ELECTORAL*, identificado con el



INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

**VOTO PARTICULAR**  
**LIC. A. PAMELA SAN MARTÍN RÍOS Y VALLES**

registro INE/CG301/2015; asimismo, instruyó a la UTCE, para el efecto de registrar, radicar e instruir la petición realizada por los representantes de los partidos políticos nacionales Acción Nacional (en adelante "PAN"), de la Revolución Democrática (en adelante "PRD"), del Trabajo, Movimiento Ciudadano, MORENA, Humanista, Encuentro Social, así como de los Consejeros del Poder Legislativo de los partidos PAN, PRD, del Trabajo y Movimiento Ciudadano, todos, ante el Consejo General, para ser sustanciado por la vía del procedimiento ordinario sancionador.

7. Mediante acuerdo de 26 de mayo de 2015, la UTCE determinó admitir a trámite el procedimiento ordinario sancionador referido anteriormente y emplazar al Partido Verde.

8. El 28 de mayo del presente año, se recibió en la UTCE, el oficio INE/UTF/DRN/12700/15, signado por el Titular de la Unidad Técnica de Fiscalización, por medio del cual remitió el diverso INE/JLE-ZAC/2861/2015, suscrito por el Vocal Secretario de la Junta Local Ejecutiva de este Instituto en el estado de Zacatecas, quien a su vez remitió el escrito presentado por el Presidente del Comité Ejecutivo Municipal del PRD en el Municipio de Zacatecas, en el que vertió diversos señalamientos atribuibles al PVEM, solicitando la cancelación de su registro como partido político.

9. Al día siguiente, la UTCE dictó proveído en el cual, debido a que el escrito presentado por el Presidente del Comité Ejecutivo Municipal del PRD, guardaba estrecha relación con los hechos que dieron origen al expediente UT/SSG/Q/CG/111/PEF/126/2015, ordenó glosar las constancias de cuenta a dicho procedimiento, a fin de que se analizaran de manera conjunta y, en su oportunidad, se emitiera el fallo que en derecho correspondiera.

10. El 3 de junio posterior, la UTCE ordenó dar vista a las partes para que en vía de alegatos manifestaran lo que a su derecho conviniera.

11. El 20 de julio de 2015, se ordenó la acumulación del expediente UT/SCG/Q/111/PEF/126/2015, al diverso UT/SCG/Q/SAQ/CG/90/PEF/105/2015, dada la



INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

VOTO PARTICULAR  
LIC. A. PAMELA SAN MARTÍN RÍOS Y VALLES

estrecha relación entre ambas causas, a fin de que en una sola resolución se determinara lo que en derecho correspondiera.

12. El 6 de agosto de 2015, se ordenó la elaboración del Proyecto de Resolución con los elementos que obraban en el expediente.

13. El 7 de agosto del presente año, la Comisión de Quejas aprobó el proyecto por mayoría de dos votos de la Consejera Electoral, Mtra. Beatriz Eugenia Galindo Centeno y de la Consejera Presidenta de la Comisión de Quejas y Denuncias, Mtra. Adriana Margarita Favela Herrera y con el voto en contra del Consejero Electoral, Dr. José Roberto Ruiz Saldaña, en el que se proponía que no ha lugar a la cancelación o pérdida de registro del Partido Verde.

14. El 12 de agosto de 2015, por mayoría de votos de las Consejeras y los Consejeros Electorales que integran el Consejo General se aprobó la resolución relativa al procedimiento sancionador ordinario UT/SCG/Q/SAQ/CG/90/PEF/105/2015 y UT/SCG/Q/CG/111/PEF/126/2015 acumulados, en que se determinó que no ha lugar a la cancelación o pérdida de registro del PVEM.

### CONSIDERANDOS

**PRIMERO.** La determinación adoptada por la mayoría de las y los integrantes del Consejo General con derecho a voto, y que es materia de este pronunciamiento, resulta de la mayor relevancia en la discusión pública respecto de la vía por la que transita y el estado que guarda la consolidación democrática de nuestro país, pues sus implicaciones trascienden el contexto mismo del caso concreto, en tanto forman parte del debate sobre la eficacia de los mecanismos que nos hemos dado para garantizar la vigencia del Estado de derecho — como elemento indispensable para la tutela del ejercicio efectivo de los derechos; en este caso, los derechos políticos—, a partir de las decisiones de las autoridades, a la luz de las atribuciones que la Constitución nos confiere.



INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

VOTO PARTICULAR  
LIC. A. PAMELA SAN MARTÍN RÍOS Y VALLES

Ahora bien, tal como se argumentó en el marco de la sesión celebrada el 12 de agosto pasado, coincido en que como intérpretes y aplicadores de las normas jurídicas del sistema político-electoral, y de conformidad con lo previsto en el artículo primero constitucional<sup>1</sup>, los integrantes del máximo órgano de dirección de este Instituto estamos obligados a realizar —en todos los casos— una interpretación que favorezca la protección más amplia de los derechos humanos reconocidos en nuestra Constitución; en el ámbito político, el derecho al voto activo y pasivo y el derecho de asociación con fines políticos.

A estas perspectivas, precisamente, atiende mi disenso con la resolución que da origen a este voto particular. Pues estoy convencida que nos encontrábamos ante una determinación de la mayor trascendencia, no sólo por el sentido de la resolución del caso concreto sometido a nuestra consideración —relevante en sí mismo—, sino por el significado que tiene para nuestra historia político-electoral y para la vigencia del Estado democrático de derecho.

Sin duda el caso concreto bajo análisis es, en sí, de gran relevancia, pues implicaba determinar si un partido político debía permanecer en el sistema de partidos mexicano, a pesar de la magnitud de las violaciones que ha desplegado contra las reglas que lo sustentan, o si éstas ameritaban su salida definitiva de la esfera de competencia electoral, precisamente en aras de su preservación.

Al respecto, es cierto, como lo sostiene la resolución en cuestión, que en cualquier régimen democrático, la pérdida del registro de un partido político constituye una medida extrema y, en función de ello, las autoridades estamos obligados a realizar una interpretación y aplicación estricta de la norma, que se ciña a los elementos previstos en la misma para su actualización. Pero también lo es que el análisis correspondiente debe partir de asumir a plenitud la extensión del mandato conferido a esta autoridad para garantizar no sólo el ejercicio material, sino la vigencia efectiva de los derechos políticos de las mexicanas y los

---

<sup>1</sup> Así como en base a los compromisos asumidos previamente por el Estado mexicano.





INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

VOTO PARTICULAR  
LIC. A. PAMELA SAN MARTÍN RÍOS Y VALLES

mexicanos, así como la preservación de los bienes jurídicos tutelados por nuestro sistema político electoral.

En este contexto, la resolución es atinada al establecer, por un lado, que la naturaleza extraordinaria de esta causal, atiende al hecho de que los partidos políticos son expresiones inequívocas de los derechos políticos y la base para el sistema representación política. Por otro, en que la actualización de esta causal tiene como consecuencia: *i)* que un partido político deje de ser partícipe de las finalidades que la Constitución atribuye a esa categoría de organizaciones<sup>2</sup> y; *ii)* clausurar un cauce de participación política a través del cual cierto sector de la ciudadanía ejerce sus derechos de asociación, de expresión, de votar y ser votado, entre otros.

Lamentablemente, el análisis que se realiza en la resolución omite considerar dos aspectos igualmente fundamentales: que los partidos políticos no representan —en sí mismos, necesariamente, y con independencia de su actuación— un medio válido y legítimo para la vigencia de los derechos político electorales; y derivado de ello, que su existencia y permanencia en modo alguno se encuentra tutelada *per se*. Razón de lo anterior, la resolución aprobada obvia el hecho de que nuestra Constitución prevé la pérdida de registro de un partido político como medida límite, precisamente porque resulta indispensable para preservar y garantizar la vigencia del sistema democrático, en los casos en los que —de forma extraordinaria, y derivado del incumplimiento “grave y sistemático” de sus obligaciones— un partido político deje de cumplir con las finalidades que le son atribuidas constitucionalmente.

Partir del supuesto contrario carece de lógica para la democracia, pues conlleva la premisa de que el bien jurídico a tutelar son los partidos políticos, su existencia y conservación en sí misma, incluso con independencia de su sujeción a las reglas del sistema que les da vigencia. Sin embargo, estos no son un fin en sí mismo, sino el medio que nos hemos dado

---

<sup>2</sup> Como son: participar en los procesos electorales federales, de las entidades federativas y municipales; promover la participación del pueblo en la vida democrática; contribuir a la integración de los órganos de representación política; y como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, en términos de lo previsto en el artículo 41 constitucional.



INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

VOTO PARTICULAR  
LIC. A. PAMELA SAN MARTÍN RÍOS Y VALLES

para la tutela del ejercicio de los derechos políticos de las y los ciudadanos; de ahí que la Constitución les reconozca como entidades de interés público, con prerrogativas y derechos, pero también con obligaciones —cuyo objeto es el cumplimiento de sus fines, indispensables para la vigencia del Estado democrático de derecho, que posibilita el ejercicio efectivo de los derechos.

Por ello, me aparto absolutamente de la determinación adoptada, porque de fondo implica privilegiar la permanencia de un partido político en contra del interés público y por encima de la tutela de los derechos y principios cuya responsabilidad nos compete.

A diferencia de lo argumentado en la resolución aprobada —que se centró en establecer un estándar de “gravedad extrema”, inexplicado y prácticamente inalcanzable, para la actualización del supuesto normativo—, en el caso concreto, la cuestión a dilucidar se debió constreñir a determinar si a pesar de la magnitud de las violaciones que el PVEM desplegó —que sin lugar a dudas actualizaron los elementos de “gravedad” y “sistematicidad” previstos en la norma, como más adelante se desarrollará— seguía cumpliendo con sus fines. En otras palabras, si dicho instituto político seguía siendo una vía válida y legítima, a la luz del sistema constitucional que le dio origen, para la participación del pueblo en la vida democrática, la integración de los órganos de representación política y el acceso de las y los ciudadanos al poder público, a través del voto libre.

Para dar cuenta de ello, bastaba analizar las disposiciones asociadas al supuesto de pérdida de registro. En este sentido, como primer elemento se debía valorar lo dispuesto en el artículo 94 de la Ley General de Partidos Políticos (en adelante “LGPP”), que prevé como causales para la pérdida del registro de un partido político: **a)** no participar en un proceso ordinario; **b)** no obtener en el elección ordinaria anterior, por lo menos el 3% de la votación válida emitida en alguna de las elecciones; **c)** no obtener este porcentaje, si participa coaligado; **d)** haber dejado de cumplir con los requisitos necesarios para obtener el registro; **e) incumplir de manera grave y sistemática a juicio del Consejo General, las obligaciones que le señala la normatividad electoral;** **f)** haber sido declarado



INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

VOTO PARTICULAR  
LIC. A. PAMELA SAN MARTÍN RÍOS Y VALLES

disuelto por acuerdo de sus miembros conforme lo establezcan sus estatutos y; **g)** haberse fusionado con otro partido político.

La revisión de dichas causales permite advertir que las mismas no corresponden a las infracciones que la norma electoral establece teniendo como sujeto activo a los partidos políticos; es decir, a las incluidas en el catálogo del artículo 443 de la LGIPE. El hecho de que la norma electoral no prevea que la pérdida de registro de un partido político es como tal una sanción, derivado de una infracción específica, nos obliga a repensar el alcance de esta hipótesis, a la luz de elementos diversos, asociados a la conformación del sistema de partidos en un Estado de derecho.

En razón de lo anterior y, en función de la naturaleza de las causales previstas para la pérdida de registro, resulta evidente que las mismas guardan relación directa y han sido definidas atendiendo a dos elementos: el reconocimiento constitucional de los partidos políticos como entidades de interés público y; el fin que deben cumplir para la tutela y ejercicio efectivo de los derechos políticos.

Lo anterior resulta evidente, si observamos la correlación de su la naturaleza con los fines que la Constitución establece a los partidos políticos:

- i)* La pérdida de registro con motivo de no participar en un proceso electoral o no alcanzar el porcentaje de votación que establece la norma, está intrínsecamente relacionada con el fin que tienen los partidos políticos de contribuir a la integración de los órganos de representación política y, como organización de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al poder público.
- ii)* La causal relativa a la omisión de cumplir los requisitos necesarios para obtener el registro, debe ser vista desde la óptica de que los partidos políticos son entidades de interés público y, en razón de ello, es justamente que la Constitución precisa que la ley determinará las normas y requisitos para su registro legal, entre otras cuestiones.



INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

VOTO PARTICULAR  
LIC. A. PAMELA SAN MARTÍN RÍOS Y VALLES

- iii) La causal materia de la resolución en cuestión, relativa a incumplir de manera grave y sistemática a juicio del Consejo General las obligaciones que le señala la normativa, debe ser analizada desde la perspectiva de que el incumplimiento en los términos referidos conlleva precisamente que el partido no actúe como entidad de interés público y, en consecuencia, no cumpla con su fin constitucional.

De lo anterior, que si bien es cierto que la pérdida de registro de un partido político constituye una medida límite, en modo alguno su permanencia puede ser vista como un bien jurídico a tutelar *per se* y en detrimento del interés público, de la tutela de los derechos políticos y el principio de equidad, y de la vigencia del Estado de derecho.

Es mi convicción que, como garantes de un sistema electoral democrático, en este caso debíamos tener como eje medular el análisis de los hechos y conductas desplegadas por el Partido Verde a la luz de las bases constitucionales que legitiman su origen y permanencia.

Contrario a ello, la construcción argumentativa ofrecida para tomar una de las determinaciones más relevantes conferidas a esta autoridad, es omisa y se limita a establecer que no se acredita la gravedad de las violaciones en su conjunto —a pesar de que en lo individual fueron consideradas tanto graves, como sistemáticas, por las distintas autoridades electorales—. No es aceptable concluir que un conjunto de infracciones, graves en sí mismas, no lo son cuando se suman y se analizan integralmente.

No resulta válido para una autoridad construir argumentos falsos para eludir la actualización de una hipótesis prevista en la ley. Es claro que las conductas son graves; eso incluso ya ha sido determinado por la autoridad jurisdiccional. Por ello, ese no era el punto que valía la pena debatir, no era el tema que debía convertirse en el centro del análisis.

Esta causal debía ser analizada y aplicada justamente desde la perspectiva de que un instituto político no debe permanecer en el sistema político-electoral mexicano, ni



INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

VOTO PARTICULAR  
LIC. A. PAMELA SAN MARTÍN RÍOS Y VALLES

beneficiarse de sus prerrogativas y derechos, cuando actúa en contra del interés público y los bienes jurídicos indispensables para la vigencia de dicho sistema.

Contrario a lo que se sostiene en la resolución, la determinación a la que se arribó no es producto de la aplicación estricta de la ley, sino de un análisis insuficiente y superficial, para atender una cuestión de la trascendencia de la pérdida de registro de un partido político. Estábamos ante una decisión de Estado, a la que se respondió con un análisis frágil, una perspectiva limitada del significado de los partidos políticos para el Estado democrático de derecho; que obvió no sólo nuestra historia, sino el contexto social actual y, lo más grave, perdió una oportunidad para legitimar a esta institución como un mecanismo eficaz para dar cauce a la deliberación y resolución de los problemas más sustantivos de nuestro sistema político-electoral.

**SEGUNDO.** Establecido lo anterior, a fin de contextualizar los hechos e infracciones del PVEM que dieron origen al presente procedimiento, y con el propósito de establecer las razones por las que sostengo que en el presente caso se actualiza no sólo la “sistematicidad” —tal como se señala en la resolución aprobada—, sino también la “gravedad”, resulta indispensable un recuento de las violaciones cometidas por el Partido Verde previo al inicio y a lo largo de las distintas etapas de los procesos electorales federal y locales de 2014-2015.

## 1.- INFORMES DE LEGISLADORES 2014

A partir de septiembre, el PVEM inició —a través de distintos medios de comunicación— la difusión de una campaña propagandística en la que se hacía alusión a los temas: “No más cuotas obligatorias escolares”; “Cadena perpetua a secuestradores”; y “El que contamina paga y repara el daño”, en la que se incluía el logotipo de dicho instituto político, la leyenda “Verde sí cumple”, el número telefónico “0180024cumple”, y la página electrónica <http://verdesicumple.org.mx/>.



INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

VOTO PARTICULAR  
LIC. A. PAMELA SAN MARTÍN RÍOS Y VALLES

Por otra parte, el 11 de septiembre inició, a nivel nacional, la difusión de promocionales “alusivos a los informes de labores” de diversos legisladores de los Grupos Parlamentarios del PVEM en las Cámaras de Senadores y Diputados, mismos que continuaron ininterrumpidamente hasta el mes de diciembre, y contenían elementos que guardaban una estrecha similitud con la campaña propagandística del partido político.

**Medidas cautelares.** El 19 de diciembre de 2014, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (en adelante “Sala Superior”) mandató a la Comisión de Quejas que de inmediato se ordenara la suspensión de la transmisión de los promocionales denunciados.

**Sentencia de fondo del primer expediente.** Posteriormente, el 29 de diciembre de 2014 la Sala Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (en adelante “Sala Especializada”) determinó que el PVEM había **inobservado el principio de equidad**, en virtud de que, a través de los informes legislativos denunciados, había llevado a cabo una **difusión reiterada, permanente y continua**, a través de mensajes **que pretendían posicionarlo** —como partido político— **frente al proceso electoral federal**, ya que se advertía un esquema de difusión de supuestos informes de labores que dio inicio a finales de septiembre de 2014, y que se prolongaron hasta el mes de diciembre del mismo año, sin que las transmisiones hubieran cesado un solo día.

**Impugnación.** Tras dos pronunciamientos de la Sala Superior, ésta calificó la conducta como **grave** e impuso al PVEM una sanción consistente en la reducción de sus ministraciones hasta alcanzar la cantidad de \$76'160,361.80, al considerar que:

i) La difusión concatenada y contrastada con la propaganda del propio partido político con motivo de su campaña “Verde sí cumple” dejó al descubierto una **estrategia propagandística encaminada a posicionar al PVEM** de frente al proceso electoral federal, lo cual es **contrario al principio de equidad** rector de los procesos electorales. Por ello, se acreditó **la intencionalidad de los legisladores y del partido y la responsabilidad directa de este último.**



ii) La difusión sistemática de los promocionales **transgredió el modelo de comunicación político electoral** vigente, pues se trató de una **estrategia de publicidad transmitida en radio y televisión de forma sucesiva, secuencial y/o escalonada por parte de los legisladores** del PVEM, a través de la cual el instituto político **obtuvo un beneficio indebido**, ya que se promocionó su nombre, emblema e imagen a través de los promocionales que se transmitieron **a nivel nacional en radio y televisión** fuera de las pautas establecidas por el Instituto, generando una **sobreexposición** del PVEM frente a la ciudadanía.

iii) La conducta infractora comenzó antes del inicio del proceso electoral y continuó una vez iniciado el mismo —de manera que de los 72 días durante los cuales se difundieron los spots; 28 fueron fuera de proceso electoral y 44 durante proceso electoral—, en los que se difundieron 239,301 spots, relativos a informes de labores de 6 legisladores del PVEM.

**Sentencia de fondo e impugnación del segundo expediente** (iniciado por la difusión de los promocionales alusivos al informe de labores de la Diputada Federal Gabriela Medrano Galindo). Luego de que en diversas ocasiones se revocaran las sentencias de la Sala Especializada, a efecto de reindividualizar la sanción, la Sala Superior resolvió, entre otras cuestiones, que se acreditó:

i) La infracción del PVEM por **violar el modelo de comunicación política**, generando una **sobreexposición** del partido político, ya que la conducta se cometió a través de una **estrategia sistemática e integral** en la que la Diputada Federal, como parte del Grupo Parlamentario del PVEM difundió 19,097 spots, de manera **reiterada y prácticamente ininterrumpida** como parte del esquema desplegado por los Legisladores del PVEM, como se desprende del cuadro siguiente:

Legislador	Fechas de difusión de promocionales							
	Septiembre	Octubre			Noviembre			Diciembre
Senador Carlos Alberto Puente Salas	18 al 29							

VOTO PARTICULAR  
LIC. A. PAMELA SAN MARTÍN RÍOS Y VALLES

Diputado Enrique Aubry de Castro Balomino		3 al 14							
Diputada Ana Lilia Garza Cadena			17 al 29						
Senadora María Elena Barrera Tapia				30 de oct al 11 de nov					
Senador Pablo Escudero Morales					13 al 25				
Diputado de R.P. Rubén Acosta Montoya						27 de nov al 9 de dic			
Diputada Gabriela Medrano Galindo								11 al 19 de dic	

ii) La conducta infractora consistió en una **estrategia de publicidad transmitida a nivel nacional en televisión abierta de forma sucesiva, secuencial y/o escalonada por parte de los legisladores** del PVEM, dentro de los cuales estaba la propaganda de la Diputada Federal, a través de la cual dicho instituto político obtuvo un beneficio indebido, ya que se promocionó su nombre, emblema e imagen, fuera de las pautas establecidas por el Instituto.

iii) La intencionalidad de los legisladores, entre ellos, la Diputada Federal, y del PVEM de quebrantar la ley.

Finalmente, se impuso al PVEM una sanción consistente en \$4'500,000.00.

## 2. CINEMINUTOS Y PROPAGANDA FIJA

Luego de que la Sala Superior ordenara el dictado de medidas cautelares respecto de la difusión de los promocionales de los legisladores del PVEM, y la Sala Especializada sancionara su difusión, en ambos casos, por la identidad que guardaban con la campaña propagandística desplegada por dicho instituto político, se denunció al PVEM por la difusión de la campaña denominada "Verde sí cumple", a través de diversos espectaculares, anuncios en casetas telefónicas, camiones de transporte público y cartelones, así como la transmisión de promocionales (cineminutos) en las salas de cine de las empresas Cinemex y Cinepolis en todo el país.





INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

VOTO PARTICULAR  
LIC. A. PAMELA SAN MARTÍN RÍOS Y VALLES

**Medidas cautelares.** El 31 de diciembre de 2014, la Comisión de Quejas ordenó, entre otros, al PVEM, que realizara las gestiones y actos necesarios, suficientes e idóneos para suspender la difusión de los cineminutos y retirar la propaganda fija denunciada; asimismo, que debía abstenerse de contratar o solicitar la difusión de propaganda con elementos similares a los que eran materia de esa determinación.

El 7 de enero de 2015, la Sala Superior confirmó esta determinación, al considerar que la difusión de la campaña denominada "verde sí cumple", a través de promocionales en las salas cinematográficas y propaganda fija, **no constituían conductas aisladas**, sino que formaba parte de la citada estrategia publicitaria, atendiendo a que su contenido era coincidente con los informes de labores legislativos.

**Sentencia de fondo.** El 6 de febrero de 2015 la Sala Especializada determinó que el PVEM había **inobservado el principio de equidad** en la contienda electoral, a través de la contratación de difusión de promocionales "cineminutos" y la colocación de propaganda fija, lo cual generó una exposición inequitativa del partido, pues era claro que, al propio tiempo en que el partido denunciado difundía mensajes dentro de las pautas y tiempos administrados por la autoridad, así como en espectaculares y salas de cine, también llevó a cabo la difusión de mensajes relativos a los informes de labores de sus legisladores federales en los cuales se hacía alusión al nombre y emblema del PVEM, que difundía en diferentes medios de comunicación social, permitiendo identificarla como si fueran la misma.

Por tanto, tomando en consideración la **temporalidad en la que se difundió la propaganda denunciada**, así como la **campaña integral y sistemática a través de diferentes medios de comunicación social**, fue claro que existió una **exposición integral, permanente, sistemática y reiterada** de la imagen del citado partido político, **contraria al modelo de comunicación política**.

**Impugnación.** El 12 de marzo de 2015, la Sala Superior resolvió que:



INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

VOTO PARTICULAR  
LIC. A. PAMELA SAN MARTÍN RÍOS Y VALLES

i) En la propaganda denunciada existió **identidad en cuanto a sus elementos esenciales** con la que había sido previamente denunciada y analizada respecto de los spots legislativos, por lo que la misma se estudió en el contexto de una **estrategia integral y sistemática a través de la cual el instituto político denunciado había buscado posicionarse de manera indebida** frente a la ciudadanía, pues la publicidad, estudiada integral y conjuntamente, generaba un **uso abusivo de los medios de comunicación social**, eludiendo con ella restricciones legales que trastocaban los valores protegidos por el artículo 41 constitucional.

ii) Desde septiembre de 2014, el PVEM había llevado a cabo una campaña reiterada y constante de publicidad, a través de diferentes medios de comunicación social, que busca favorecerlo frente a la ciudadanía de manera indebida, ya que implica conducta irregular y sistemática contraria al modelo de comunicación.

Finalmente, se impuso al PVEM una sanción consistente en \$7'011,424.56.

### 3. INCUMPLIMIENTO A MEDIDAS CAUTELARES SOBRE CINEMINUTOS Y PROPAGANDA FIJA

**Resolución de fondo.** El 6 de marzo de 2015, el Consejo General del INE declaró fundado el procedimiento iniciado contra el PVEM, por incumplir una orden —una medida cautelar— dictada por la Comisión de Quejas para:

a) Suspender la difusión de cineminutos, y retirar propaganda fija, pues a pesar de tener la obligación de suspenderla, la difusión prosiguió al menos 36 días posteriores a la orden, sin que las acciones emprendidas por el PVEM —solicitar a las empresas implicadas el retiro y la suspensión de la difusión de la propaganda— hayan sido suficientes y eficaces para el efecto requerido.

b) Abstenerse de contratar y solicitar la difusión de propaganda con elementos similares a los cineminutos objeto de la medida cautelar, ya que con posterioridad a la notificación de



INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

VOTO PARTICULAR  
LIC. A. PAMELA SAN MARTÍN RÍOS Y VALLES

las medidas cautelares, suscribió un contrato para la difusión de la propaganda, y se siguió ejecutando otro, suscrito un día antes del dictado de la medida cautelar.

Por otra parte, si bien el PVEM cambió los materiales que se difundían en los cines, los sustituyó por otros de la misma naturaleza, ya que existía coincidencia en sus contenidos, en el mensaje central que transmiten, en la idea que proyectaban, por lo que se trataba de modificaciones de forma, pero que no impactaban en el fondo del mensaje que transmitían.

Derivado de lo anterior, se determinó **la responsabilidad directa del PVEM**, del incumplimiento a lo ordenado en el acuerdo de medidas cautelares, así como **la intencionalidad** en su actuar, por lo que la falta se calificó como **grave especial** —por la afectación que la misma ocasiona a la finalidad buscada por las medidas cautelares, además de la trasgresión a los principios de legalidad y seguridad jurídica que deben regir la actuación de la autoridad y su relación con los sujetos regulados, mismos que en última instancia trascienden a la garantía de protección de derechos y principios fundamentales del sistema democrático—, y se impuso al PVEM una sanción equivalente a \$67,112,123.52.

**Impugnación.** El 13 de mayo de 2015 la Sala Superior confirmó la resolución anterior, y estableció que la infracción atribuida al PVEM cobró mayor relevancia porque incumplieron una medida cautelar decretada, derivado de lo cual obtuvo un **beneficio indebido por la amplia exposición** de la imagen del ente político promocionado frente a la ciudadanía, a través de cineminutos y propaganda fija.

#### 4. PROPAGANDA PAUTADA, LENTES GRADUADOS, INFORMES LEGISLATIVOS Y VALES DE MEDICINA

##### 4.1. PROMOCIONAL DE INTERCAMPAÑAS “CUMPLE LO QUE PROMETE” (Raúl Araiza – Galilea Montijo)



INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

VOTO PARTICULAR  
LIC. A. PAMELA SAN MARTÍN RÍOS Y VALLES

Si bien en un primer momento se dictaron medidas cautelares por la difusión de este promocional y la Sala Especializada declaró fundado el procedimiento, por contener elementos coincidentes con la campaña “Verde Sí cumple”, la Sala Superior revocó la determinación, al considerar que la misma se podía difundir durante el periodo de intercampana, ya que esas frases en ningún momento se habían considerado ilegales en sí mismas.

#### 4.2 PROMOCIONALES SOBRE VALES DE MEDICINA (Senadora Ninfa Salinas Sada y Vocero Carlos Alberto Puentes Salas)

A partir del 23 de enero de 2015, el PVEM llevó a cabo una campaña publicitaria, alusiva al programa de “Vales de Medicina”, en diversos medios de comunicación —entre ellos, su pauta en radio y televisión—.

Por otra parte, desde el 19 de febrero se inició la difusión de un promocional alusivo a la Senadora Ninfa Salinas Sada, en el que también se hacía referencia a dicho programa.

**Sentencia de fondo.** El 10 de marzo de 2015 la Sala Especializada determinó que con la difusión de la propaganda denunciada, el PVEM **puso en riesgo el principio constitucional de equidad** durante el desarrollo del proceso electoral federal, toda vez que, **nuevamente, de manera reiterada, generó una sobreexposición indebida** de su imagen frente a la ciudadanía.

Se acreditó la responsabilidad del partido político, considerando que ya había sido declarado ilegal la difusión simultánea y coincidente de una campaña de posicionamiento del partido político, y la difusión de informes de labores de sus legisladores, que confirmó la exposición integral, permanente, sistemática y reiterada de la imagen de este partido político **en contravención al principio de equidad.**

La coincidencia entre la propaganda —en radio y televisión, así como la propaganda fija, móvil y en Internet— demostró no sólo una **continuación flagrante de identidad, sino**



INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

VOTO PARTICULAR  
LIC. A. PAMELA SAN MARTÍN RÍOS Y VALLES

**también una sistematicidad y un convencimiento explícito por insistir en una exposición indebida del partido político denunciado**, así como el establecimiento de una campaña simultánea mediante el lanzamiento de promocionales en radio y televisión y en propaganda fija, móvil e Internet, que pone en riesgo la equidad en los procesos electorales federal y locales, sin que exista precepto legal alguno que permita dicha sistematicidad.

Ello ocasiona que el PVEM, amparado bajo la difusión de propaganda política, realice una campaña de reiteración y sistematicidad, que conforme a las particularidades que rodean el presente asunto, pone en riesgo el principio de equidad.

Finalmente, se estimó que la propaganda **implicó una utilización indebida de la implementación, ejecución y calendarización de un programa social, así como un uso indebido de la pauta.**

#### 4.3 ENTREGA DE LENTES CON GRADUACIÓN GRATUITOS

**Sentencia de fondo.** El 10 de marzo de 2015, la Sala Especializada determinó la responsabilidad del partido político, ya que con la difusión de la propaganda denunciada, el PVEM **puso en riesgo el principio constitucional de equidad** durante el desarrollo del proceso electoral federal, toda vez que, de manera reiterada, **generó una sobreexposición** indebida de su imagen frente a la ciudadanía, lo que **constituye una estrategia sistemática y permanente**, en términos análogos a hechos que se analizaron en procedimientos especiales sancionadores previamente resueltos, en los que, por la difusión de promocionales que contienen la misma estrategia mediática.

Además, la campaña **implicó un beneficio de manera directa, inmediata y en especie, vulnerando el artículo 209, párrafo 5** de la LGIPE que prohíbe que se oferte o entregue algún beneficio directo, indirecto, mediato o inmediato, en especie o efectivo, a través de cualquier sistema que implique la entrega de un bien o servicio.



INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

VOTO PARTICULAR  
LIC. A. PAMELA SAN MARTÍN RÍOS Y VALLES

**Impugnación.** El 27 de abril de 2015 la Sala Superior confirmó la responsabilidad del PVEM en la difusión de los promocionales (pautados por el partido y por sus legisladores) relativos a los “vales de medicina”, así como en la entrega de lentes con graduación gratuitos. No obstante, revocó la sentencia para su reindividualización. Finalmente se calificó la falta como *grave ordinaria* y se impuso al PVEM una sanción de \$3'349,641.00.

#### 5. INCUMPLIMIENTO DE MEDIDAS CAUTELARES POR PROPAGANDA FIJA RELATIVA A LA CAMPAÑA DE VALES DE MEDICINA

**Resolución de fondo.** El 20 de mayo de 2015, el Consejo General del INE declaró fundado el procedimiento iniciado contra el PVEM por incumplir una orden –medida cautelar– dictada por la Comisión de Quejas, para que realizara las gestiones y actos necesarios, suficientes e idóneos para retirar la propaganda que contuviera el logotipo del PVEM, y las leyendas alusivas a la campaña de “Vales de medicina” en distintos medios de comunicación; y se abstuviera de contratar o solicitar la difusión de propaganda con elementos similares.

Al respecto, se concluyó que si bien el PVEM ofreció diversas comunicaciones con las empresas y testimonios notariales, para demostrar el cumplimiento de las medidas cautelares ordenadas, de las mismas no se acredita que dentro del plazo que le fue concedido al PVEM, se hubiesen llevado a cabo algún tipo de acciones necesarias, suficientes e idóneas para acreditar la eliminación pública de toda esa propaganda y, por el contrario, sí se contaba con evidencia de la permanencia y exposición de la propaganda sobre la cual se ordenó su retiro.

Derivado de lo anterior, se determinó la **responsabilidad directa del PVEM**, del incumplimiento a lo ordenado en el acuerdo de medidas cautelares, así como la **intencionalidad** en su actuar, por lo que la falta se calificó como ***grave especial***. Aunado a ello, tomando en consideración la reiteración en el incumplimiento de acatar diversas medidas cautelares, así como la sobreexposición indebida cuyo impacto podría tener incidencia, no sólo en el proceso electoral federal, sino también en los locales en curso, se



INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

VOTO PARTICULAR  
LIC. A. PAMELA SAN MARTÍN RÍOS Y VALLES

impuso al PVEM una sanción consistente en la interrupción de sus tiempos en radio y televisión, los tres últimos días de campaña a nivel nacional en los procesos electorales en curso.

**Impugnación.** El 29 de mayo de 2015, la Sala Superior confirmó la falta imputada al PVEM; no obstante, ordenó que se reindividualizara la sanción, considerando los actos realizados por dicho instituto político para el cumplimiento de las medidas cautelares ordenadas, por lo que finalmente se impuso al PVEM una sanción consistente en la interrupción total del tiempo en radio y televisión por 1 día de campaña a nivel nacional en los procesos electorales en curso<sup>3</sup>.

## 6. PAPEL GRADO ALIMENTICIO PARA ENVOLVER TORTILLAS

Se denunció que en distintos establecimientos comerciales —tortillerías— se observaron posters con la frase "*Si Cumple*", vinculado al PVEM, en los que además, se envolvían tortillas con papel que contenía el emblema del mismo instituto político.

**Sentencia de fondo.** La Sala Especializada tuvo por acreditada la conducta ilegal del PVEM, al incurrir en **sobreexposición** ilegal de manera reiterada y sistemática, en diversos estados del territorio nacional, con motivo de las campañas "propuesta cumplida" y "el verde cumple lo que propone", así como la distribución de papel grado alimenticio para envolver tortillas con el emblema de dicho partido, lo que implicó un **beneficio directo, inmediato y en especie para quienes los reciben.**

Por lo anterior, la conducta se calificó como *grave*, y se impuso al PVEM una sanción equivalente a \$5'411,840.76.

## 7. BOLETOS DE CINE

---

<sup>3</sup> Cabe señalar que el Consejo General siguió calificando la infracción con una gravedad especial.



INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

VOTO PARTICULAR  
LIC. A. PAMELA SAN MARTÍN RÍOS Y VALLES

**Sentencia de fondo.** El 1º de mayo de 2015, la Sala Especializada tuvo por acreditada la infracción atribuida al PVEM, consistente en la vulneración a lo dispuesto por el artículo 209, párrafo 5, de la LGIPE, en virtud de la entrega de boletos para asistir a funciones en salas de cine del complejo CINEMEX, pues ello se traducía en la entrega de un **beneficio directo, inmediato y en especie a la ciudadanía**, lo cual, contravenía la prohibición prevista en la reciente reforma en materia electoral, y suponía una especie de **condicionamiento al elector**, ya que dicho beneficio tiende a generar un vínculo de agradecimiento y lealtad del votante hacia dicho instituto político, lo que inducía de manera ilegal el ánimo y libertad de sufragio de los electores, bien jurídico tutelado en el citado precepto.

**Impugnación.** El 3 de junio de 2015, la Sala Superior ordenó que reindividualizara la sanción, misma que finalmente consistió en una reducción del 25% de una ministración, equivalente a la cantidad de \$6'734,038.57.

## 8. CALENDARIOS Y CARTAS INDIVIDUALIZADAS.

**Sentencia de fondo.** El 20 de marzo de 2015 la Sala Especializada consideró que el medio comisivo (calendarios), en realidad **formó parte de la estrategia publicitaria sistemática e integral, frente al proceso electoral en curso, identificada con el slogan “verde sí cumple”**, en tanto que se aprecia que contiene los mismos elementos que en su momento fueron materia de pronunciamiento.

Al respecto, si bien el PVEM contrató la difusión de los calendarios el primero de 1º del 2014 —fecha anterior a que se declarara ilegal la campaña denominada “Verde sí cumple”—, quedó acreditado que su distribución se pactó con SEPOMEX el 2 de enero de 2015; inclusive se acreditó que los calendarios se distribuyeron hasta el 13 de febrero, con la obtención del correspondiente registro postal para la distribución y entrega de la propaganda.





INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

VOTO PARTICULAR  
LIC. A. PAMELA SAN MARTÍN RÍOS Y VALLES

**Impugnación.** El 8 de abril de 2015, la Sala Superior ordenó que se reindividualizara la sanción, misma que finalmente se impuso en la cantidad de \$4'167,117.38.

#### 9. SPOT DE INTERCAMPAÑAS, INSERCIONES EN REVISTAS Y ENVÍO DE MENSAJES DE TEXTO.

**Sentencia de fondo.** El 1º de mayo de 2015 la Sala Especializada consideró que la propaganda denunciada —inserciones en revistas, spots pautados, mensajes de texto, y propaganda en redes sociales— formaba parte de la **estrategia sistemática, continua y reiterada** de la que se benefició el PVEM, a partir de la identidad sustancial de la propaganda que se consideró ilícita, cuyo propósito fue posicionarlo frente a la ciudadanía en el proceso electoral federal en curso.

Aunado a lo anterior, respecto a las inserciones con motivo de los vales de medicina se consideró que la utilización de la propaganda política con los lemas de vales de medicina, implicó la **apropiación indebida en la implementación, ejecución y calendarización de un programa social**, lo cual no constituyó sólo la difusión de logros de gobierno, sino que además, interviene en la comunicación de cómo opera el programa social, respecto a las fechas de inicio, los beneficios sociales y económicos, por lo que sustituyó a las entidades públicas responsables de la implementación y ejecución del programa social “vales de medicinas”, lo cual no está permitido por la ley, ni por la jurisprudencia electoral, por lo que ocasionó una vulneración a la normativa electoral aplicable.

**Impugnación.** El 3 de junio de 2015, la Sala Superior ordenó que se reindividualizara la sanción, misma que finalmente se impuso en la cantidad de \$717,308.96.

#### 10. TARJETAS PREMIA PLATINO.

**Sentencia de fondo.** El 27 de marzo de 2015 la Sala tuvo por acreditadas las infracciones atribuidas al PVEM, relativas a que la entrega de las Tarjetas “Premia Platino” implicó un



INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

VOTO PARTICULAR  
LIC. A. PAMELA SAN MARTÍN RÍOS Y VALLES

**beneficio de manera directa, inmediata y en especie**, distribuidos por tercera persona, lo cual está prohibido por el artículo 209, párrafo 5, de la LGIPE.

Además, consideró que se acreditó que el PVEM alteró el modelo de comunicación política al continuar con la campaña reiterada y sistemática de posicionamiento indebido, generando una sobreexposición que puso en riesgo el principio de equidad en la contienda electoral que está obligado a respetar.

**Impugnación.** El 6 de mayo de 2015 la Sala Superior confirmó la violación a lo dispuesto en el artículo 209, párrafo 5 de la LGIPE<sup>4</sup>; no obstante, revocó la resolución en cuanto a considerar la conducta como una continuación de la campaña sistemática e integral que afectó el modelo de comunicación política. Por ello, ordenó que se emitiera una nueva resolución en la que reindividualizara la sanción a imponer al PVEM, sin tomar en cuenta dichas consideraciones. La sanción finalmente se impuso en el 15% de su ministración mensual.

## 11. KIT ESCOLAR.

**Sentencia de fondo.** El 15 de mayo de 2015, la Sala Especializada determinó que el PVEM fue responsable directo del incumplimiento a lo dispuesto por el artículo 209, párrafos 3 y 4 así como 443, párrafo 1, incisos a) y n), 470 párrafo 1, inciso b) de la LGIPE, y 25 párrafo 1, incisos a) y u) de la LGPP, que lo obligaban a cumplir las obligaciones que marca la normativa electoral y conducir sus actividades dentro de los cauces legales, al haber contratado la **elaboración y distribución de artículos que forman parte del Kit escolar, en materiales distintos al textil.**

**Impugnación.** El 1º de julio de 2015 la Sala Superior consideró que debía tenerse por acreditada, además, la infracción relacionada con las **dádivas, presión o coacción**, y, por

---

<sup>4</sup> Ya que las tarjetas incluían la membresía al programa de descuentos que ofrece la tarjeta, cuyo costo fue de \$200.00 cada una, mismo que fue cubierto por el PVEM, la cual implica el derecho de acceder a los descuentos que otorga "PREMIA PLATINO" en distintos establecimientos



INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

VOTO PARTICULAR  
LIC. A. PAMELA SAN MARTÍN RÍOS Y VALLES

tal motivo, ordenó la reindividualización de la sanción. Finalmente, se impuso al PVEM una sanción consistente en el 15% de la ministración mensual que le corresponde por financiamiento público para actividades ordinarias permanentes 2015.

## 12. PROCEDIMIENTO EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN POR SPOTS SOBRE INFORMES DE LABORES DE SUS LEGISLADORES

**Resolución.** El 13 de mayo de 2015 el Consejo General determinó que el PVEM vulneró el artículo 25, párrafo 1, inciso a) e i), en relación con el artículo 54, párrafo 1, inciso a) de la LGPP, debido a que se acreditó que el PVEM había recibido **aportaciones en especie de personas prohibidas (órgano de gobierno)**, al haberse determinado como aportación de los grupos parlamentarios de dicho partido en las cámaras de Senadores y de Diputados del Congreso de la Unión la transmisión de mensajes comprados por éstos para la difusión de la campaña denominada 'Verde sí cumple' en su modalidad de 'informes legislativos', desde el mes de septiembre de 2014 hasta el mes de marzo de 2015.

Derivado del razonamiento anterior, la falta se calificó como **grave especial**, y se impuso al PVEM una sanción equivalente a la cantidad de \$322'455,711.06.

**Impugnación.** En contra de esta resolución, se interpuso apelación ante la Sala Superior, misma que se encuentra pendiente de resolver.

## 13. DISTRIBUCIÓN DE DESPENSAS EN QUINTANA ROO.

**Sentencia de fondo.** El 2 de mayo de 2015, la Sala Especializada determinó que el PVEM había incumplido lo dispuesto por el artículo 209, párrafos 1 y 5 así como 443, párrafo 1, incisos a) y n), 470 párrafo 1, inciso b) de la LGIPE y 25 párrafo 1, incisos a) y u) de la LGPP, en virtud de que se había acreditado que los días 20 de abril y 18 de mayo de 2015 (esto es, dentro del periodo de campañas), se distribuyeron despensas en un domicilio de Cancún, Quintana Roo.



INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

VOTO PARTICULAR  
LIC. A. PAMELA SAN MARTÍN RÍOS Y VALLES

Consideró que las despensas constituyeron un bien que reportó un beneficio directo, al tratarse de bienes consumibles entregados como **dádivas**, a través del programa “Familia Verde”.

**Impugnación.** El 1º de julio de 2015 la Sala Superior revocó la sentencia, señalando que el periodo de distribución de despensas fue mayor, y que la falta no debió calificarse como *leve*, sino como *grave*.

Finalmente, el 3 de julio de 2015, la Sala Especializada impuso nueva sanción al PVEM por la cantidad del 10% de una ministración mensual que le correspondía por financiamiento público para actividades ordinarias permanentes 2015, lo que equivalía a la cantidad de \$2'693,615.43.

#### 14. USO INDEBIDO DE LA PAUTA EN CHIAPAS, SPOT “ERA FEDERAL”.

**Sentencia de fondo.** El 2 de junio de 2015 la Sala Especializada determinó que el promocional denunciado —mismo que fue pautado por el PVEM dentro de los tiempos correspondientes a la pauta federal— no fueron destinados a la difusión de mensajes para las campañas del proceso electoral federal, sino que la propaganda electoral que contenía se dirigía al electorado de esa entidad federativa.

Derivado de lo anterior, la falta se calificó con una *gravedad ordinaria*, y se impuso al PVEM una sanción de \$70,100.00.

#### 15. CONTRATACIÓN DE PUBLICIDAD VIRTUAL EN VALLAS Y UNIMETAS.

**Sentencia de fondo.** El 4 de junio de 2015 la Sala Especializada determinó que el PVEM había violado los artículos 41, Base III, Apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 159, párrafos 2 y 4; 160, y 443, párrafo 1, incisos a); i), y n), de la LGIPE, en virtud de que, aun y cuando el PVEM realizó un acto que, en principio se encuentra permitido —contratar la colocación de propaganda electoral en publicidad fija



INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

VOTO PARTICULAR  
LIC. A. PAMELA SAN MARTÍN RÍOS Y VALLES

visible en las canchas alrededor de los estadios de fútbol—, omitió tomar las previsiones necesarias para evitar que ese material fuera visible en televisión, a pesar que es un hecho notorio que los encuentros futbolísticos se transmiten, generalmente, en televisión abierta.

**Impugnación.** El 1º de julio de 2015 la Sala Superior determinó que estaba acreditada la conducta típica consistente en la adquisición de tiempos de televisión fuera de los pautados por el INE, por lo que ordenó a la Sala Especializada que reindividualizara la sanción, misma que finalmente se estableció en \$385,550.00.

#### **16. INCUMPLIMIENTO DE MEDIDAS CAUTELARES AL NO SUSPENDER LA CAMPAÑA DE LAS TARJETAS “PREMIA PLATINO”.**

**Sentencia de fondo.** El 9 de julio de 2015 la Sala Especializada determinó que el PVEM incumplió las medidas cautelares dictadas con respecto a la suspensión de la campaña de descuentos vinculada con las tarjetas "Premia Platino", al quedar acreditado que en 9 sucursales del Distrito Federal y en 3 empresas en las que se aplicaban los descuentos, se seguía recibiendo las mismas y no se recibieron notificaciones de la cancelación de éstas, respectivamente.

Derivado de lo anterior, la falta se calificó como *grave ordinaria*, y se impuso al PVEM una sanción equivalente a \$462,660.00.

#### **17. PROCEDIMIENTOS EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN.**

**Resolución de fondo.** El 20 de julio de 2015, el Consejo General resolvió 4 expedientes en materia de fiscalización, en los que consideró que el PVEM omitió destinar un total de \$20,176,542.38, a los fines establecidos por el legislador, al haberlos destinado a: i) la adquisición y distribución de 10,000 tarjetas “Premia Platino” (\$2,320,000.00); ii) la adquisición y distribución de boletos de cine (\$15,082,320.00); iii) la adquisición y distribución de pliegos de papel grado alimenticio, con estampado del logotipo del PVEM (\$226,565.24); y iv) la difusión y entrega de lentes graduados gratuitos (\$2,547,657.14).



INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

VOTO PARTICULAR  
LIC. A. PAMELA SAN MARTÍN RÍOS Y VALLES

**Impugnación.** En contra de las resoluciones anteriores, se interpuso apelación ante la Sala Superior, mismas que se encuentran pendientes de resolver.

#### 18. USO INDEBIDO DE DATOS PERSONALES EN LA ENTREGA DE BOLETOS DE CINE Y TARJETAS PREMIA PLATINO

**Sentencia de fondo.** El 16 de junio de 2015 la Sala Especializada tuvo por acreditado el uso indebido de datos personales, en virtud de que la entrega de cartas con nombres y domicilios de ciudadanos, en las que se acompañaron tarjetas "premia platino" y/o boletos de cine, sin su previo consentimiento, afectó los derechos de confidencialidad e intimidad, así como de oposición al uso de su información personal y de exigir el cese de la misma. Además, se acreditó la existencia de la infracción consistente en la afiliación no solicitada, respecto a una ciudadana.

Derivado de lo anterior, la falta se calificó como *grave ordinaria*, y se impuso al PVEM una multa de \$94,635.00.

**TERCERO.** Previo a exponer las razones por las que, contrario a lo que sostiene la resolución, las acciones desplegadas por el PVEM, ameritaban que esta autoridad determinara la pérdida de su registro, es necesario señalar que los elementos a partir de los que se determina lo contrario no sólo carecen de base legal, sino que constituyen en sí mismos, un mecanismo para evadir el pronunciamiento de fondo respecto de las consecuencias que el actuar de este instituto político tiene para la vigencia del Estado democrático, a través de la tutela y ejercicio efectivo de los derechos políticos. Me refiero a dos cuestiones esencialmente:

**A.** Sostener y concluir que a pesar de que se encuentra acreditado que el PVEM desarrolló una estrategia electoral que tuvo como propósito vulnerar de manera sistemática sus obligaciones, a fin de posicionarse y obtener ventaja indebida e ilegal frente al electorado, no se actualiza el elemento de "gravedad extrema" en su conducta. Es decir, a razonar que



INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

VOTO PARTICULAR  
LIC. A. PAMELA SAN MARTÍN RÍOS Y VALLES

las acciones desplegadas por este instituto político no fueron de la entidad suficiente para impedirle que siga siendo partícipe de la competencia electoral de un sistema democrático, aun cuando actúa al margen de sus reglas, y hace de ello el marco de su estrategia electoral.

El elemento de “gravedad extrema” exigido por la resolución, resulta insostenible no sólo por el hecho de que la hipótesis jurídica de la pérdida de registro no califica la gravedad, ni establece en función de ella, un estándar específico para su actualización; sino porque en la resolución se hace la calificación y se asigna el estándar, sin la exposición argumentativa de sus alcances y los razonamientos que le sostienen.

Para establecerlo, en primer lugar se señala —dogmáticamente— que el concepto de gravedad del tipo administrativo de pérdida de registro, se rige bajo un parámetro distinto en cuanto a su magnitud y efectos, en comparación con el exigido para la calificación de gravedad que recae a procedimientos administrativos sancionadores en específico o en concreto. Desde esta visión, se desestima la posibilidad de un análisis global y conjunto de la gravedad de las violaciones cometidas por el Partido Verde, a partir de la calificación jurídica y los bienes jurídicos trasgredidos o afectados —en términos de lo resuelto en los distintos procedimientos en los que se acreditaron las infracciones— de cada una de las conductas en lo individual.

Así, se califica la gravedad de “extrema” y al margen de un análisis sobre las afectaciones que las distintas conductas ocasionaron a los derechos que se tutelan a través de la competencia política, se le asimila a que las violaciones se traduzcan en “trasgresiones directas e irreparables”, y al “trastocamiento del orden constitucional” en modo y forma tal que el partido haya dejado de cumplir con las finalidades que le mandata la Carta Magna; que se socavaran de forma generalizada e irreparable los principios constitucionales, así como los derechos y libertades fundamentales de la ciudadanía; que se haya puesto en peligro la paz pública, o que se utilizaran métodos violentos para minar los principios democráticos.



Al respecto, resulta inconcuso, que esta autoridad para efecto de valorar la actualización de esta hipótesis jurídica debía interpretarla; sin embargo, esa facultad en modo alguno puede traducirse como la posibilidad de hacer nugatoria la previsión misma, o ir más allá de lo que específicamente señala la norma, pues ello conllevaría arrogarse una facultad de carácter legislativo, conferida a uno de los Poderes de la Unión.

**B.** Hacer depender la actualización de la “gravedad extrema”, de los efectos que elementos ajenos al actuar del propio partido político tuvieron en el impacto de su conducta. Es decir, considerar que el aspecto a dilucidar es el resultado de las conductas desplegadas, a partir de factores externos a la voluntad del partido político, a saber, las sanciones impuestas por las autoridades, el conocimiento y posible reproche público, y la eficacia de la estrategia.

Coincidió en que efectivamente, esta autoridad debía determinar, bajo una interpretación estricta de la previsión legal, si se actualizaba el elemento de gravedad que establece la hipótesis —dada la consecuencia material de su actualización—; sin embargo, a diferencia de lo que se pretende en la resolución, su actualización no podía en modo alguno ceñirse al análisis del efecto “neutralizador” que la intervención de esta autoridad administrativa, la publicidad de las infracciones y la eficacia —material— de la estrategia, tuvieron para impedir que las acciones desplegadas por el PVEM se tradujeran en “trasgresiones irreparables” y el “trastocamiento constitucional”.

Este efecto “neutralizador” es el segundo elemento a partir del que la resolución sostiene su sentido. En ello radica, quizá, una de las cuestiones más graves de la misma; en obviar que al ser los partidos políticos entidades de interés público, es inadmisibles que la gravedad de las conductas ilegales que despliegan se analice desde la perspectiva de que la materialización del fin que perseguían haya sido previamente sancionado por la autoridad, o contrarrestado por otros factores externos, al margen de un estudio respecto del efecto que estos elementos tuvieron sobre la actuación —y no la eficacia de la estrategia— del propio partido.





**VOTO PARTICULAR**  
**LIC. A. PAMELA SAN MARTÍN RÍOS Y VALLES**

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

Sin lugar a dudas, recae en esta autoridad electoral nacional, la responsabilidad de tutelar la vigencia de los derechos y principios asociados a la competencia electoral y, en razón de ello, de investigar y sancionar las conductas contrarias al régimen constitucional y legal vigente que son del ámbito de su competencia. Pero, eso no se traduce en que el cumplimiento de sus atribuciones sustituya la obligación de los partidos políticos de conducirse dentro de los cauces legales, de ajustar su conducta y la de sus militantes a los principios del Estado democrático y de respetar la libre participación política de los demás partidos políticos y los derechos de los ciudadanos.

Sostener esa premisa es delicado, pues significa de fondo obviar que al ser los partidos políticos entidades de interés público, la primera exigencia que recae sobre ellos, es justamente que su actuar se ciña al marco jurídico que busca la vigencia del Estado democrático de derecho. Pensar lo contrario, es eximirles de su responsabilidad primaria, poniendo en riesgo sistema político-electoral y, en consecuencia, el interés público.

Tampoco resulta aceptable trasladar la vigencia del estado de derecho a la posibilidad de que la ciudadanía conozca las trasgresiones al mismo y pueda —o no— establecer un reproche moral, o suponer que la gravedad de una violación deriva de su eficacia material. Para determinar la pérdida del registro o no de un partido, resulta irrelevante el actuar de las autoridades electorales —en cuanto a la cantidad y magnitud de las sanciones impuestas con motivo de cada una de las violaciones—, tampoco es relevante el conocimiento que la ciudadanía pudo tener o no de las conductas irregulares, tampoco lo es el efecto que dichas conductas tuvieron en los resultados electorales; es decir, si su estrategia logró o no su propósito.

El análisis de la actualización de la hipótesis jurídica que fue materia de la resolución aprobada debe realizarse a la luz del actuar mismo de los partidos políticos, de la acreditación o no de violaciones graves y sistemáticas en su actuar —y no en factores ajenos al mismo—, precisamente porque la incorporación de una medida extrema en nuestro orden jurídico, resulta indispensable para preservar y garantizar su vigencia, lo cual únicamente se logra cuando todos los actores —no solo los partidos, también las



INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

VOTO PARTICULAR  
LIC. A. PAMELA SAN MARTÍN RÍOS Y VALLES

autoridades, al conocer y valorar las conductas de aquéllos— ajustan su actuar al marco de las normas que nos hemos dado. De ahí que la incorporación del efecto “neutralizador” carece de sentido y es contrario al objeto mismo de la hipótesis.

¿Cómo puede considerarse que no es lo suficientemente grave la conducta de un partido político que de forma intencional y sistemática, antes y a lo largo del proceso electoral, hace de la violación al Estado de derecho, su estrategia electoral? Contrario a la conclusión a la que se arriba en la resolución aprobada, yo sostengo que es en este elemento, precisamente, en el que radica la gravedad. Pues lo que debiera resultar relevante a este análisis es el actuar mismo del partido, su intención sistemática de vulnerar las reglas del sistema de partidos que le dan origen, en el marco precisamente del Estado democrático de derecho, y de los valores en los que se sustenta la construcción de la democracia en nuestro país.

Una resolución como la aprobada, que obvia lo anterior, implica tolerar, y naturalizar una estrategia sistemática de violación a las normas que nos hemos dado, en detrimento de la vigencia del Estado de derecho, con las consecuentes afectaciones que ello acarrea al ejercicio de los derechos.

**CUARTO.** Como he señalado no comparto los elementos que constituyen la base de la resolución aprobada por la mayoría de las Consejeras y los Consejeros Electorales. Mi disenso no se constriñe a una cuestión formal, se trata de una diferencia de fondo no sólo en torno a la trascendencia del caso, sino de la perspectiva con que esta autoridad asume las responsabilidades de Estado que constitucionalmente le han sido conferidas.

La existencia y permanencia de los partidos políticos encuentra sustento en el artículo 41 constitucional, de ahí que cualquier reflexión que persiga el objeto de dar cuenta del cumplimiento de sus obligaciones, debe partir de las finalidades que le son atribuidas en tanto entidades de interés público.



INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

VOTO PARTICULAR  
LIC. A. PAMELA SAN MARTÍN RÍOS Y VALLES

Desde esta perspectiva, la argumentación y análisis se debía constreñir precisamente al artículo 41 constitucional. Me explico, en mi opinión estábamos obligados a revisar los hechos denunciados, el contexto en que tuvieron lugar, las infracciones, su impacto para la vigencia de los derechos y principios asociados al sistema electoral, y en razón de ello, determinar si el actuar del Partido Verde —su intencionalidad y objeto— fue ajeno a su naturaleza constitucional, los fines que tiene conferidos y al interés público, de cara a las bases en que descansa la vigencia del sistema electoral mexicano, para garantizar el principio de equidad en la competencia electoral, a saber: *i)* el modelo de financiamiento de los partidos políticos; *ii)* el modelo de comunicación político-electoral; *iii)* el principio de imparcialidad que debe regir el ejercicio de los recursos públicos con el objeto de evitar influencias indebidas en la competencia electoral, previsto en el artículo 134 de la Constitución y; *iv)* la prohibición de la entrega de bienes y servicios por cualquier vía o medio que pudieran constituir una dádiva que atente contra el ejercicio del voto libre.

A. Como he señalado, este caso debía tomar en consideración nuestra historia; en ese sentido, cobra particular relevancia el sistema de financiamiento vigente. Se trata de impedir que en la competencia electoral y, sus resultados, participen actores ajenos a los previstos constitucionalmente, y el dinero represente un elemento que pueda desequilibrar la balanza.

Por ello, el modelo de financiamiento para los partidos políticos, tiene como elementos fundamentales: *i)* el acceso equitativo de los partidos políticos al financiamiento público, de acuerdo con la fórmula de distribución constitucional establecida; *ii)* la prevalencia de los recursos públicos sobre los de origen privado; *iii)* respetar la prohibición absoluta de recibir o utilizar aportaciones de entes prohibidos —entre ellos, los poderes públicos y las personas morales— y; *iv)* ajustar el monto de los recursos erogados en el marco de las precampañas y campañas a los topes de gasto determinados por la autoridad administrativa.



VOTO PARTICULAR  
LIC. A. PAMELA SAN MARTÍN RÍOS Y VALLES

¿Qué impacto tuvo el actuar del Partido Verde para vigencia de este modelo? En mi opinión, no sólo resultaba exigible una reflexión que diera cabida a esta interrogante, sino que ello era de la mayor relevancia.

La resolución, obviando que el sistema político-electoral prevé el cumplimiento de las reglas del modelo de financiamiento como uno de los pilares esenciales para la vigencia del principio de equidad, evade entrar al fondo de esta cuestión, limitándose a realizar un acercamiento superficial cuya conclusión es que las infracciones en materia de financiamiento fueron “castigadas de modo ejemplar”.

Reitero lo que he señalado, el actuar que se encontraba sujeto a análisis, era el del PVEM y no el de las autoridades electorales. Debíamos pues, analizar las infracciones cometidas y su alcance para la vigencia del modelo de financiamiento.

¿Ante qué nos encontramos? Si hacemos un análisis integral de lo que significa el monto de los recursos obtenidos por el Partido Verde de forma ilegal, a través de las aportaciones que recibió por entes prohibidos —en concreto, por Poderes Públicos— podemos advertir que no se trataba de una cuestión menor.

Como he señalado, este instituto político se vio beneficiado de la estrategia de publicidad transmitida a nivel nacional de forma sucesiva, secuencial y/o escalonada a lo largo de 72 días, previo al inicio y durante el proceso electoral, que tuvo por objeto promocionar su nombre, emblema, imagen y acciones, amparada en la supuesta realización de informes legislativos. Ello, representó no sólo la violación de las reglas de financiamiento, sino el quebranto de los principios de equidad e imparcialidad.

En el ámbito del financiamiento, el monto involucrado —107.5 millones de pesos— nos permite dar cuenta de la gravedad de esta conducta, dado su alcance, pues representó: *i)* el 33.25% del financiamiento público ordinario a que tiene derecho ese partido político durante este año —que corresponde a 323.2 millones de pesos—; *ii)* el 110.84% del financiamiento que le fue otorgado para los gastos de campaña —que corresponde al



INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

VOTO PARTICULAR  
LIC. A. PAMELA SAN MARTÍN RÍOS Y VALLES

monto de 97 millones de pesos— y; *iii*) el equivalente al tope de gasto de 85 campañas a diputados federales —fijado por esta autoridad en 1.26 millones de pesos—, que en su conjunto representarían el 28% de las 300 campañas celebradas este año para dicho cargo.

Es cierto, como se establece en la resolución, el Partido Verde fue sancionado por esta conducta por un monto de 322 millones de pesos, que como podemos observar, prácticamente equivale al financiamiento que le fue asignado este año para la realización de sus actividades ordinarias. Sin embargo, ello carece de relevancia para el análisis y determinación de la causal de pérdida de registro, pues lejos de “neutralizar” sus efectos como se pretende sostener, evidencia la gravedad del actuar del partido y sus efectos para la vigencia de uno de los pilares que sostienen el principio de equidad.

El Partido Verde, rompió el equilibrio en el ámbito del financiamiento; lo que es más grave aún, lo hizo como una estrategia para posicionarse frente al electorado, a costa de infringir otros dos de los pilares en que descansa la vigencia del sistema político-electoral, la no intervención de los poderes públicos y la equidad en la competencia electoral.

B. Ahora ¿qué significa el actuar del Partido Verde a la luz del objeto del modelo de comunicación político-electoral vigente? Volvamos a pensar en nuestra historia; ese modelo surgió para atender una de las preocupaciones centrales que arrojó la contienda del Proceso Electoral Federal de 2006: impedir que actores ajenos a la competencia electoral —ya sea a través de su capital económico o del poder que ostentan para determinar lo que se difunde o no, a través de la radio y la televisión— y en favor de intereses privados, movieran la balanza en beneficio o detrimento de cualquiera de las fuerzas políticas. Se trataba pues, de hacer prevalecer el interés público y garantizar el principio de equidad en la contienda.

El modelo, representó en su momento el establecimiento de un nuevo paradigma de comunicación entre los partidos, las autoridades electorales y la sociedad, cuyo objeto persiste y es favorecer las condiciones de competencia y garantizar que la ciudadanía cuente con la información —tanto de precampañas y campañas electorales, como de las





INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

VOTO PARTICULAR  
LIC. A. PAMELA SAN MARTÍN RÍOS Y VALLES

autoridades responsables de organizar los comicios y tutelarlos por la vía administrativa, penal y jurisdiccional— que requiere para el ejercicio de su derecho al voto libre en el marco de los procesos comiciales.

En aras de cumplir su objeto, el modelo de comunicación político-electoral prevé: *i)* el acceso equitativo de los partidos políticos a tiempos en radio y televisión administrados por el INE; *ii)* la prohibición absoluta para los partidos políticos y sus candidatos de contratar y/o adquirir, por sí o por tercera persona, tiempos en radio y televisión y; *iii)* la prohibición para cualquier persona física y moral de contratar propaganda en radio y televisión dirigida a influir en las preferencias electorales de los ciudadanos, ni a favor o en contra de los partidos políticos o de candidatos.

Nuevamente, la resolución y quienes la aprobaron evadieron la reflexión que ameritaba el actuar del Partido Verde para la vigencia de este modelo, reduciendo el análisis a la gravedad ordinaria con que fueron calificadas por la autoridad jurisdiccional las distintas conductas investigadas y sancionadas en lo individual, y de nueva cuenta a los efectos “neutralizadores” de elementos ajenos al actuar e intención del partido.

Veamos ¿de qué conductas se trata? De acuerdo con lo referido en el Considerando segundo de este pronunciamiento, de las sentencias emitidas por el TEPJF se desprende que está acreditado que el Partido Verde, a través de una estrategia sistemática, integral y prácticamente ininterrumpida, durante los últimos 4 meses del 2014, obtuvo una sobreexposición en radio y —principalmente— televisión, en los horarios de mayor audiencia, a través de la difusión de más de 250 mil impactos de los promocionales alusivos a los informes de sus legisladores, que se desarrolló a la par de la estrategia de comunicación del propio partido político con el lema “Verde sí cumple”, en distintos medios de comunicación —principalmente a través de cineminutos y la colocación de propaganda fija—, misma que continuó durante el 2015, en contravención al modelo de comunicación política.



INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

VOTO PARTICULAR  
LIC. A. PAMELA SAN MARTÍN RÍOS Y VALLES

Con posterioridad a esto, y no obstante desde finales de 2014 se dictaron medidas cautelares para suspender estas conductas —tanto las campañas relativas a los informes legislativos, como la campaña coincidente del PVEM—, y las mismas fueron sancionadas por la autoridad jurisdiccional, a partir del inicio de las intercampañas en febrero de 2015, el Partido Verde continuó con la misma estrategia, ahora con la difusión de promocionales alusivos al informe legislativo de la Senadora Ninfa Salinas, y una campaña del partido —tanto en radio y televisión, como en distintos medios de comunicación—, ahora con el lema “Vales de Medicina”.

Aunado a esto, debe señalarse que no obstante las órdenes de la autoridad para suspender la difusión de esta propaganda, en distintas ocasiones el PVEM incumplió las medidas cautelares emitidas —cuyo propósito consiste en lograr la cesación de los actos o hechos que pudieran constituir una infracción a la normatividad electoral, con el objeto de evitar la producción de daños irreparables, la afectación de los principios que rigen los procesos electorales, o la vulneración de los bienes jurídicos tutelados en la normatividad electoral, hasta en tanto se emita la resolución definitiva—, principalmente, para suspender la difusión de la campaña del partido político —a través de cineminutos y la colocación de propaganda fija— que se concatenaba con la de sus legisladores, atentando con ello además, contra los principios de legalidad y equidad en la competencia política.

Aunado a ello, como parte de la estrategia y para fortalecer el posicionamiento y la sobreexposición del PVEM, a la campaña en los medios de comunicación, se sumó la entrega ilegal de beneficios a la población. Es decir, el partido buscó que su posicionamiento en los medios se tradujera también en un posicionamiento en el territorio a través de la entrega de bienes y/o servicios directamente a las ciudadanas y ciudadanos.

¿Cuál fue la estrategia en este caso? Entregar bienes o servicios que en algunos casos se encontraban correlacionados con las campañas publicitarias en medios de comunicación social, y en otros consistían en la entrega —en sí mismo— de beneficios. El objeto: reforzar las campañas publicitarias del partido —con la entrega directa de: lentes con graduación

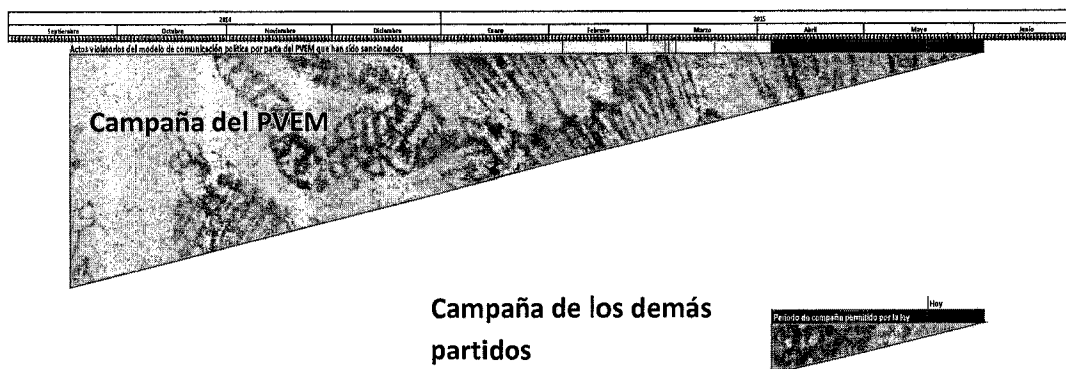




INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

gratuitos; tarjetas de descuento *Premia Platino*; boletos de cine; papel grado alimenticio y; kit escolar—, de cara a la jornada electoral.

El impacto de las conductas no fue menor. La difusión de los promocionales legislativos difundidos en 2014 se realizó a lo largo de 72 días, previo al inicio de las precampañas electorales, cuando el resto de los competidores —en el marco de la ley— aún se encontraban ausentes, por lo que el nivel de atención que pudo recibir esta campaña con fines electorales es mucho mayor, posicionando al Partido Verde de forma anticipada, en una magnitud que se evidencia claramente en la siguiente gráfica —que se encuentra a foja 138 de la resolución aprobada—:



Estamos ante un hecho de la mayor relevancia, se trata de un partido político que diseñó e implementó una estrategia de posicionamiento ante el electorado, cuyos ejes medulares se constreñían al quebranto de las reglas que garantizan la competencia equitativa en dos ámbitos, el acceso a los medios de comunicación y la prohibición de la entrega de dádivas.

A ello habría que sumar otro hecho, la difusión de propaganda político-electoral disfrazada de informes legislativos, representa sin lugar a dudas un atentado contra el derecho a la información en dos vertientes: por un lado, el derecho de la ciudadanía a recibir información que dé cuenta de las acciones de los poderes públicos, en apego al principio de rendición de cuentas —y no por vías de simulación—, y por otro lado, el derecho de la ciudadanía a



INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

VOTO PARTICULAR  
LIC. A. PAMELA SAN MARTÍN RÍOS Y VALLES

acceder a información fidedigna que se ciña a las reglas del modelo de comunicación político-electoral, respecto de las ofertas políticas para el ejercicio de su derecho al voto.

Quienes aprobaron la resolución, consideran que la violación al modelo de comunicación político-electoral, como producto de la intervención de poderes públicos —en contra del principio de imparcialidad—, fortalecida mediante la entrega de dádivas y contraviniendo los principios que tutelan el derecho a la información, no es de la entidad suficiente para atribuirle la “gravedad extrema” que en su concepto requiere la actualización de la hipótesis jurídica de la pérdida de registro.

El problema de ese razonamiento, más allá de lo evidente que resulta que se acreditaban los dos elementos de la conducta —“gravedad” y “sistematicidad”—, es justamente no entender que para determinar si se actualizaba o no la hipótesis de pérdida de registro, resultaba indispensable realizar un análisis conjunto de las conductas y no verles como hechos aislados, obviando que cada una de éstas fue diseñada, premeditada y dolosamente, como parte de una estrategia que atendía al mismo fin: posicionar ilegalmente al Partido Verde.

**QUINTO.** Como lo señalé en el marco de la sesión en que se aprobó esta determinación, coincido en que al asociarse la decisión bajo análisis al ejercicio de derechos humanos, resulta relevante que esta autoridad retome los principios del derecho internacional de derechos humanos y, en razón de ello, los criterios y parámetros establecidos por los órganos internacionales en la materia.

De hecho, otra de las cuestiones de la resolución que causa extrañeza es que retomen los parámetros establecidos por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, para determinar la pérdida del registro de un partido político, pretendiendo sostener que a la luz de los mismos no procedía la pérdida de registro del Partido Verde.



INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

VOTO PARTICULAR  
LIC. A. PAMELA SAN MARTÍN RÍOS Y VALLES

¿A qué parámetros me refiero? A la acreditación no sólo de la existencia de una hipótesis prevista en ley —como sucede en nuestro marco jurídico—, sino a la legitimidad del fin perseguido, y su carácter necesario en una sociedad democrática.

Ello, a fin de evitar que: *i)* se afecte la esfera de derechos asociada a la existencia y permanencia de los partidos políticos y; *ii)* la causal de pérdida de registro, se convierta en un mecanismo para materializar la exclusión de ofertas u opciones políticas que resultan incómodas o son ideológicamente contrarias a una visión mayoritaria o de quienes ostentan en un determinado momento el poder público.

Es mi convicción que en este caso, se cumplen los parámetros señalados; el análisis de las conductas desplegadas por el Partido Verde, evidencia que la gravedad de los hechos no se constriñe a que se encuentra plenamente acreditada la violación de la ley, ni al número de veces, o los mecanismos específicos empleados con este fin, sino a que este partido político hizo de ello su estrategia electoral y su marco de acción, de forma previa y durante las distintas etapas del proceso electoral, incluso a pesar de los mandatos de esta autoridad administrativa y del propio TEPJF.

No estamos ante conductas aisladas, o coyunturales. Lo que se acredita, tal como el propio proyecto lo establece y ha sido analizado en este pronunciamiento, es que desde septiembre de 2014, es decir, siete meses antes de que los demás partidos políticos empezaran las campañas electorales, el Partido Verde emprendió una estrategia publicitaria integral, reiterada y constante, a través de diferentes medios y vías, que claramente buscaba favorecerlo frente a la ciudadanía de manera indebida, vulnerando el principio de equidad en la competencia.

La legitimidad del fin perseguido con la pérdida de registro del Partido Verde radica precisamente en la necesidad de preservar la vigencia de las bases constitucionales que dotan de sustento al sistema de partidos —y permiten la celebración de elecciones libres y auténticas— y, en función de ello, tutelar de forma efectiva los derechos y principios previstos en la materia electoral.



INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

**VOTO PARTICULAR**  
**LIC. A. PAMELA SAN MARTÍN RÍOS Y VALLES**

Contrario a lo que se señala en la resolución, no se trata de vulneraciones menores, como se ha expuesto en este pronunciamiento; para evidenciarlo, basta acudir a nuestra historia electoral, en particular, al conjunto de reformas que han hecho posible el sistema político-electoral vigente, y sus propósitos.

Primero, en 1977 se buscó garantizar el pluralismo, es decir, que existieran mecanismos efectivos para la constitución legal de ofertas políticas diversas; en los 90s, las medidas implementadas tuvieron como objeto dotar de autonomía a la autoridad electoral —romper su dependencia del Poder Ejecutivo—, a fin de hacer confiable la organización de las elecciones, en otras palabras, fortalecer la función electoral a través del principio de imparcialidad.

Una vez que se garantizaron estas dos premisas, la preocupación se centró en garantizar la existencia de condiciones efectivas de competencia, a través del establecimiento de reglas para garantizar el principio de equidad; en este contexto se enmarcan las reformas constitucionales y legales de 2007-2008 y la de 2014, a partir de las cuales se creó un nuevo modelo de comunicación política, se prohibió la intervención de los poderes públicos en la competencia electoral, se fortaleció el modelo de fiscalización, se incluyeron causales de nulidad vinculadas a la equidad en la competencia, y se fortalecieron los mecanismos para atacar la compra y coacción del voto.

Como intérpretes y aplicadores del marco jurídico electoral, no podemos obviar la historia e invisibilizar los derechos y principios cuya vigencia se encuentra en riesgo, a la luz del contexto y la coyuntura actual. En este sentido, la argumentación que sostiene la resolución es frágil, primero, porque establece como centro del análisis la eliminación de una oferta política, desde la perspectiva de su legitimidad intrínseca y su relevancia para el pluralismo y; segundo, porque desde la perspectiva referida realiza un análisis superficial de la afectación de derechos que traería como consecuencia la desaparición del PVEM, sin dar cuenta de las implicaciones que las conductas desplegadas por dicho instituto tienen para



INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

VOTO PARTICULAR  
LIC. A. PAMELA SAN MARTÍN RÍOS Y VALLES

el efectivo ejercicio de esos derechos, la tutela del principio de equidad y la vigencia del Estado de derecho.

La pérdida del registro de un partido, no puede ser analizada al margen de las circunstancias del contexto en que tiene lugar, de la necesidad de preservar las reglas que garantizan las condiciones de competencia —a través de la sujeción de los actores políticos a las mismas— y de la afectación que las conductas que realizó ocasionó en el ejercicio efectivo de los derechos y libertades, y la tutela del principio de equidad, pilares de nuestro sistema democrático.

Se trataba de establecer si resulta permisible para un partido político participar en la competencia político electoral, a partir de una estrategia, intencional, de vulnerar las reglas del juego democrático, de forma grave y sistemática, precisamente para posicionarse ante la ciudadanía, y si a pesar de ello, se podía determinar que el partido cumple con sus finalidades constitucionales. La respuesta es no, resulta inadmisibles que un partido político que ha operado premeditada e intencionalmente bajo esta lógica —en contra de sus obligaciones—, permanezca siendo beneficiario de las prerrogativas y derechos que la Constitución le confiere como entidad de interés público, cuando su actuar es ajeno a dicha naturaleza.

En este caso, **se cumplen cada uno de los parámetros establecidos por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos para determinar la pérdida del registro, porque el fin que se perseguía era legítimo y necesario: impedir que el Partido Verde siga utilizando el registro que le fue conferido en contra de los fines del sistema democrático y en detrimento del ejercicio de los derechos políticos y el principio de equidad; es decir, del interés público que le dio origen.**

Al diseñar e implementar una estrategia electoral que tuvo como propósito vulnerar de manera sistemática las bases constitucionales que buscan garantizar la celebración de elecciones libres y auténticas con el objeto de obtener una ventaja ilegal frente al electorado, dejó de actuar como una entidad de interés público, omitió el cumplimiento de



INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

VOTO PARTICULAR  
LIC. A. PAMELA SAN MARTÍN RÍOS Y VALLES

sus obligaciones y, en consecuencia, actuó de forma contraria a los fines constitucionales que prevén la existencia y permanencia de los partidos políticos.

¿Con qué objeto podría resultar legítima la permanencia de un partido político bajo estas circunstancias, más aún, beneficiarle con la entrega de prerrogativas y permitirle que siga conteniendo en los procesos electorales y sea el mecanismo para el acceso al poder público? De fondo, estamos ante la consecuencia más grave que el actuar de un partido político puede conllevar para el sistema político-electoral, atentar contra la soberanía nacional.

No hay razonamiento alguno que permita sostener que un partido que opera al margen de la legalidad y hace de ello su mecanismo de participación en la competencia electoral contribuye al ejercicio de la soberanía a través de la integración de los Poderes de la Unión. **La gravedad, no se limita al quebranto de las reglas de la competencia electoral, sino al hecho concreto de que ello se traduce en el acceso ilegítimo al poder público y su ejercicio.**

Si las conductas, si la estrategia intencional, grave y sistemática, que hoy analizamos no es suficiente para ameritar la pérdida del registro de un partido político, valdría la pena preguntarnos, ¿Qué se necesita para ello? ¿A qué extremo tienen que llegar las conductas y la afectación a los bienes jurídicos tutelados por el sistema electoral?

El INE —y el IFE en su momento— se crearon con autonomía constitucional, con el objeto esencial de que la deliberación y resolución de las cuestiones del ámbito de su competencia se sucedan a la luz del interés público ¿Cómo sostener que una determinación como la adoptada no atenta justamente contra el objeto constitutivo de esta institución?

**SEXTO.** Es mi convicción que quienes formamos parte del Consejo General debemos tener presente que el diseño de esta Institución, las reglas para la conformación de su máximo órgano de dirección y el derecho a voz y voto que se nos ha conferido en ejercicio de una responsabilidad de Estado, es producto de la sinergia de esfuerzos que desde los



INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

VOTO PARTICULAR  
LIC. A. PAMELA SAN MARTÍN RÍOS Y VALLES

diferentes ámbitos de la sociedad se han impulsado a lo largo de nuestra historia para consolidar la democracia y hacer efectivo el ejercicio de la soberanía. Quizá es importante preguntarnos ¿qué ha permitido la existencia de convergencias para el constante rediseño del sistema político-electoral mexicano, aún en las coyunturas sociales, económicas y políticas más complejas? Un fin: que prevalezca el pacto social y, en consecuencia, el Estado de derecho.

La naturaleza deliberativa de este Consejo General y el ejercicio del derecho a voto que tenemos las y los Consejeros Electorales, atiende justamente a que en esta autoridad recaee el ejercicio de la función esencial para la vigencia de la soberanía: la organización de elecciones libres, auténticas y periódicas, para el ejercicio del derecho al voto con el objeto de renovar los poderes Legislativo y Ejecutivo.

**Se trata de garantizar la voluntad de ciudadanas y ciudadanos, no de administrar la realización de elecciones. La tutela efectiva del ejercicio de los derechos no se reduce en modo alguno a su materialización.**

Me explico, la garantía del derecho al voto no se constriñe a que las ciudadanas y los ciudadanos mexicanos hayan acudido o acudan el día de la jornada a emitirlo, que puedan hacerlo; va más allá. Como autoridad, estamos obligados a garantizar que los contendientes entre quienes puedan elegir, hayan competido ajustándose a las reglas que la Constitución prevé para tutelar el principio de equidad, en particular, a través del modelo de comunicación político-electoral, las reglas del financiamiento de los partidos políticos, la no intervención de poderes públicos para incidir en la contienda de acuerdo con el principio de imparcialidad y la omisión de entregar dádivas para coaccionar el voto.

En este contexto, vale la pena preguntarnos, ¿Se tutela de forma efectiva el derecho al voto, cuando un partido participa en los procesos democráticos, actuando al margen de las reglas que nos hemos dado para garantizar la competencia? ¿Podemos realmente afirmar que el voto es libre en esas condiciones y que no se afectó la equidad? ¿Estas conductas no afectan derechos fundamentales de las y los ciudadanos? Estoy convencida que



INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

VOTO PARTICULAR  
LIC. A. PAMELA SAN MARTÍN RÍOS Y VALLES

permitir que un partido actúe dolosamente, al margen de sus fines constitucionales y en contra de las reglas del sistema que prevé su origen y permanencia, en modo alguno contribuye al ejercicio efectivo de derechos.

El mismo análisis debe hacerse en relación al derecho a ser votado y el derecho de asociación con fines políticos. En nuestro sistema electoral los partidos políticos siguen siendo la vía privilegiada para el acceso al poder público, de ahí la relevancia del principio de equidad, pues como he señalado no se trata de la competencia en sí misma, sino del acceso a los cargos de elección popular a través del ejercicio del derecho al voto libre.

La cuestión a dilucidar es justamente advertir quiénes pueden ser partícipes de la competencia electoral y, en razón de ello, recibir el voto de la ciudadanía para acceder al poder y ser depositarios de las funciones públicas de mayor relevancia.

Se trata del voto que se emite para decidir, quién legisla y gobierna, es decir, en qué manos se deposita la responsabilidad del quehacer público.

Es mi convicción que el ejercicio efectivo de este derecho tampoco puede ser garantizado al margen del cumplimiento de las reglas de la competencia electoral. En modo alguno es admisible que en aras de preservar el derecho de quienes compiten postulados por un partido político que de forma grave y sistemática violó los principios rectores del sistema electoral, se vulneren: *i)* los derechos del resto de los contendientes, dado que participan en condiciones de desventaja derivadas del posicionamiento indebido de un partido y; *ii)* el derecho al voto libre.

A ello, se suma una cuestión de la mayor relevancia, los votos emitidos a favor del Partido Verde permitieron, en su momento, a diversos candidatos acceder al poder público. Hoy, justamente desde el ejercicio de sus funciones, operaron políticamente para posicionar al partido que los postuló, afectando no sólo el principio de equidad, y las reglas de financiamiento de los partidos políticos, sino el principio de imparcialidad que debe regir su actuar.





INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

VOTO PARTICULAR  
LIC. A. PAMELA SAN MARTÍN RÍOS Y VALLES

Por otra parte, la Constitución reconoce el derecho de asociación en esta vertiente, con el objeto de favorecer la participación de las ciudadanas y los ciudadanos en el debate de las cuestiones públicas y como un mecanismo efectivo para su acceso al poder público. Como he señalado, el ejercicio efectivo de los derechos sólo es posible en el marco del Estado de derecho, de ahí, que el análisis para determinar la permanencia de un instituto político en el sistema de partidos no puede reducirse a sopesar su número de militantes o simpatizantes.

El número de adeptos de un partido político no puede ser alegado para eximirle del cumplimiento de sus responsabilidades constitucionales y legales, pues sólo constituye una vía legítima y válida para el ejercicio de los derechos de éstos, cuando ajusta su actuar a los cauces legales. **Contrario a lo que pretende sostener la resolución, la permanencia de un partido que violó de forma sistemática y grave las obligaciones que se desprenden de su base constitucional, no constituye una vía para el ejercicio de los derechos, sino un riesgo para su tutela efectiva.**

**SÉPTIMO.** Con base en lo expuesto, es mi convicción que el respeto a las reglas y al Estado de derecho es precisamente el mecanismo a través del cual garantizamos, como autoridad, el ejercicio efectivo de los derechos que nos corresponde tutelar.

El principal problema que hemos tenido en la construcción de la democracia en México es la credibilidad de los procedimientos, a partir del cumplimiento y efectividad de la ley para alcanzar el objeto que persigue.

En la crisis política que hoy vive nuestro país, subrayada por la ausencia de un Estado de derecho, y la impunidad generalizada, la recuperación de estos valores es insoslayable para pensar la democracia en México y hacer que esta institución prevalezca como la vía legítima para dar cauce a la deliberación y resolución de los problemas más sustantivos de nuestro sistema político-electoral.



INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

**VOTO PARTICULAR**  
**LIC. A. PAMELA SAN MARTÍN RÍOS Y VALLES**

Por las razones expuestas, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 41, párrafo segundo, Base V, apartado A, párrafos segundo y tercero de la Constitución; 35, 36, párrafo primero y 39, párrafo 2 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 13, párrafo 1, fracción b), del Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral y 26, párrafo 6, del Reglamento de Sesiones del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, **presento VOTO PARTICULAR**, respecto del punto 8 del orden del día de la Sesión Extraordinaria del Consejo General celebrada el pasado 12 de agosto de 2015, **relativo a la Resolución del Consejo General del Instituto respecto del procedimiento sancionador ordinario UT/SCG/Q/SAQ/CG/90/PEF/105/2015 y UT/SCG/Q/CG/111/PEF/126/2015 acumulados**, iniciado con motivo del escrito presentado por Sergio Aguayo Quezada y otros, así como por el Acuerdo del Consejo General INE/CG301/2015, sobre la pérdida y/o cancelación del registro del Partido Verde Ecologista de México, derivado de supuestas violaciones graves, sistemáticas y reiteradas a la normatividad electoral.



---

**LIC. A. PAMELA SAN MARTÍN RÍOS Y VALLES**  
**CONSEJERA ELECTORAL**